

## El gobierno de facto en Bolivia y sus crímenes contra la humanidad

Desde las elecciones del 20 de octubre de 2019, Bolivia atraviesa la peor crisis política de su historia. El Tribunal Electoral confirmó la victoria de Evo Morales por un 47,08% de los votos emitidos con una diferencia mayor al 10% (648.180 votos) sobre el candidato Carlos Mesa por lo que fue suficiente para ganar las elecciones en primera vuelta.

La primera afirmación de fraude por parte de la OEA desencadenó violencia de parte de los grupos de choque de la oposición que quemaron los tribunales electorales departamentales y sedes del partido Movimiento Al Socialismo MAS-IPSP. Muchas autoridades como la alcaldesa de Vinto en Cochabamba Patricia Arce, el ex viceministro de interculturalidades Feliciano Vegamonte, el presidente de la cámara de diputados Víctor Borda, el ministro de minería César Navarro y sus familias fueron secuestrados y brutalmente agredidos obligándolos a renunciar a sus cargos.

El amotinamiento de fuerzas policiales en todo el país y las FFAA acuarteladas dieron pie a una campaña de terror en contra del “masismo”, cuyos miembros fueron amenazados, secuestrados, torturados, sus domicilios particulares quemados en un ambiente de total impunidad, obligándolos a la renuncia en el caso de ser autoridades como la alcaldesa de Vinto en Cochabamba.

Con la sugerencia de renuncia del Presidente Evo Morales realizado por el comandante de las FFAA, el 10 de noviembre, Morales se vio obligado a dimitir argumentando con ello que esa decisión pondría alto a la violencia de la oposición y sus grupos de choque y paramilitares (motoqueros).

Consumado el golpe con la renuncia de Evo Morales, se desató la represión de los grupos paramilitares apoyados por la Policía y las FFAA, calificando a los manifestantes que defendían al gobierno de “turbas”, “vándalos”, “radicales” o “delincuentes”. Las redes sociales y la mayoritaria y casi hegemónica prensa privada sostuvieron una campaña de propaganda a favor del golpe de estado.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, el principal líder de las bandas paramilitares amenazó a los “masistas”, autoridades de gobierno y empresarios de Santa Cruz simpatizantes del Gobierno de Evo Morales, con tener preparada una lista de traidores a los que se eliminaría al estilo de Pablo Escobar en Colombia.

La oposición al gobierno del Presidente Evo Morales, conformó milicias armadas que contaron con el apoyo abierto de la Policía boliviana. Grupos como la Unión Juvenil Cruceñista, definida por la Federación Internacional de Derechos Humanos como “grupo paramilitar fascista”, fueron los principales ejecutores de la represión.

Se asaltaron y destruyeron los medios de comunicación de las organizaciones campesinas como la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), cuyo director, José Aramayo, fue amarrado a un árbol y torturado, así como la de las organizaciones sociales de base como las radios comunitarias (RPOs), o BTv, el canal de televisión estatal. Al ser señalados como partidarios del gobierno, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación de servicio público fueron atacados, humillados e impedidos de trabajar.

Mediante redes sociales circuló un listado de lugares para bloquear que incluye las sedes de ministerios y otras instituciones estatales, residencias de funcionarios gubernamentales y las misiones diplomáticas de Cuba y Venezuela. A raíz de acusaciones falaces, grupos violentos iniciaron el hostigamiento permanente de dichas Embajadas y la persecución constante a su

personal diplomático, hasta lograr que este salga del país. Estas acciones violentas vulneran el derecho internacional, la Convención de Viena y otros tratados internacionales.

Como pudieron verificar los organismos de DDHH que vinieron al país, el 15 de noviembre, una marcha de campesinos de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba fue balaceado en Sacaba con 9 víctimas mortales y decenas de heridos. A través de videos grabados por los propios campesinos se pudo evidenciar el uso de armamento de guerra. Las FFAA actuaron ese día amparados en el DS N°4078 que les permitía el uso de armamento bélico sin responsabilidades posteriores.

Lo mismo pasó en Senkata, El Alto, provocando la muerte de al menos 10 personas y decenas de heridos cinco días después. Las fuerzas represoras conformadas por la Policía y las FFAA indicaron que actuaron en contra de “terroristas”, que querían provocar una explosión de la planta de gas. Los movimientos sociales, antiguos miembros del gobierno, campesinos e indígenas que se manifestaban en contra del golpe de estado son asesinados, el total de las víctimas asciende a 35 muertos y más de 800 heridos.

El 25 de noviembre miembros del brazo paramilitar del gobierno de facto ocuparon la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz para quemar sus equipos y documentación. Estas operaciones continúan hasta el día de hoy. El viernes 17 de enero se informó de la eliminación de las antenas de la Empresa ENTEL en varias provincias rurales que proveía de los servicios de acceso a comunicación celular y radiofónica.

El 6 de diciembre, el gobierno de facto, aprobó el DS N°4100 cuyo objeto era el de indemnizar a los familiares de los 35 fallecidos y centenares de heridos por la represión policial y militar, con la condición a que renunciaran a llevar el caso a las Naciones Unidas u otros organismos de derechos humanos.

Al respecto, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) expresó su preocupación ante el decreto, por incluir una cláusula que imposibilitaría el recurso de las víctimas a instancias internacionales para denunciar los crímenes de los que fueron víctimas violando tratados internacionales como el Tratado de Roma que prevé el principio de imprescriptibilidad en materia de crímenes contra la humanidad. La Misión de observación de la CIDH, que recogió numerosos testimonios de las masacres de Sacaba y Senkata, denunció que en Bolivia no existe **“ninguna garantía de independencia del poder judicial”**.

La persecución, las detenciones arbitrarias, las amenazas de muerte contra ex autoridades del gobierno de Evo Morales, así como a dirigentes de organizaciones sociales y del MAS han sido cotidianas. Es evidente la judicialización de la protesta social y de la libertad de expresión (Incendios de casas, linchamientos, ataques racistas, etc.).

La Defensoría del Pueblo de Bolivia, también ha sufrido hostigamiento, principalmente en la ciudad de Cochabamba, tanto en las oficinas de dicha entidad así como en los domicilios privados de sus representantes y sus familias.

Por otra parte, el permanente hostigamiento a la embajada y residencia de México, viola todas las convenciones y acuerdos internacionales que protegen a las representaciones diplomáticas de los diferentes países. La no emisión de salvoconductos para personas que solicitaron asilo político, que además fue otorgado por dicho país, es una flagrante violación de los derechos humanos y políticos de las personas.

Cabe destacar la persecución de altos funcionarios del gobierno de Morales asilados en la embajada de México en La Paz y a quienes se les niega la emisión de un salvoconducto para que puedan abandonar el país como el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el ex ministro Hugo Moldiz; la ministra de Culturas Wilma Alanoca; el gobernador de Oruro

Víctor Hugo Vázquez; el director de gobierno electrónico Nicolás Laguna; el ministro de Defensa Javier Zavaleta; el ministro de Justicia Héctor Arce, el de Minería César Navarro entre otros.

Es evidente que las acusaciones en contra de las ex autoridades son parte de una estrategia de persecución político-judicial, denominada "Lawfare", que pretende anular la participación política del MAS-IPSP en las próximas elecciones programadas para el 3 de mayo.

El ministro de gobierno de facto, Arturo Murillo, afirmó que iría de "cacería" contra miembros del gobierno destituido y del MAS. Hizo pública su intención de llevar a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional de La Haya "por crímenes de lesa humanidad", culpándole de las 35 víctimas mortales, incluso después de su dimisión y exilio del país. Las masacres de Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo, etc., fueron documentadas por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos y por países amigos. La información de primera mano levantada por éstas da testimonio de la brutalidad del golpe de estado en Bolivia.

El uso de adjetivos agraviantes y denigrantes por su contenido discriminatorio es frecuente de parte del gobierno de facto como el hecho de referirse como "salvajes", "narcoterroristas", "vándalos", "delincuentes", etc., en contra de los miembros del gobierno de Evo Morales y las organizaciones sociales que lo respaldan, así como a las misiones internacionales de observación de derechos humanos, a la defensoría del pueblo e incluso a los periodistas, tildándolos de "guerreros digitales" o "terroristas informáticos".

Murillo, celebra y se ufana del miedo sembrado en la gente por la "pacificación" a través de la brutalidad policial/militar en contra de la subversión de las "hordas indígenas y masistas". Se "matan entre ellos", "*No toleraremos terroristas ni sediciosos, los estamos vigilando*", afirma.

El gobierno de facto impuesto por la violencia de los grupos paramilitares y policiales, así como por las FFAA, eliminó derechos fundamentales a la protesta y al derecho al voto que fue desconocido por las élites que ahora gobiernan el país como lo había hecho durante los 180 años de la República colonial y excluyente.

El gobierno de facto ha militarizado el país y reprimido cualquier tipo de protesta haciendo demostraciones de fuerza con militares y armas de guerra en las calles de las principales ciudades de Bolivia.

El argumento y la apelación a la amenaza terrorista, la denuncia de la existencia de núcleos subversivos o grupos sediciosos armados masistas justifican la necesidad de crear Unidades Especiales de la Policía para la lucha antiterrorista asesorada por el gobierno de Israel como afirma el mismo ministro de facto Murillo. Es la justificación para más violencia y brutalidad represiva estatal.

Se asegura la existencia de actividades sediciosas y terroristas para justificar la represión, se otorga impunidad a las fuerzas militares para masacrar indígenas, se militariza el país y se hace demostraciones de fuerza con el uso de armas de guerra.

La sistemática violación de los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos y garantías individuales es resultado evidente de la existencia de un régimen dictatorial impuesto por un golpe cívico, policial y militar.

Liquidar toda fuente de información independiente es parte de la estrategia de implementar un cerco mediático

Los organismos de derechos humanos de todo el mundo, deben presionar para que cesen la persecución política y la represión encabezadas por las bandas paramilitares protegidas por la Policía y las FFAA.

**Por lo antes expuesto:**

**Condenamos el golpe de estado ejecutado y financiado por fuerzas de la derecha boliviana antidemocrática y otras fuerzas foráneas que pretenden recuperar el control de los importantes recursos naturales del país como el Litio y el Gas.**

**Condenamos enérgicamente los mensajes de odio y racismo, así como la violencia extrema perpetrada por los partidarios de la derecha radical antidemocrática contra los pueblos indígenas, campesinos.**

**Condenamos contundentemente el “Lawfare” del gobierno de facto que ha desplegado una maquinaria perversa de persecución política mediante un continuo linchamiento mediático, invención de causas judiciales y violación permanente de toda convención, norma internacional y constitucional de Bolivia.**

**Exhortamos a las FFAA y la Policía Nacional de Bolivia a velar y resguardar, ante todo, la vida y la dignidad de cada persona que se encuentre en territorio boliviano, sea cual sea su afinidad política o nacionalidad, así como a respetar la inmunidad de las representaciones diplomáticas y proteger sus funcionarios, asilados e instalaciones.**

**Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas para que condenen este golpe violento, así como las violaciones cotidianas que conculcan todas las libertades individuales, sociales, jurídicas, culturales y políticas de las grandes mayorías.**

**Pedimos a la Comisión de DD.HH. de la ONU que en base a los informes, investigaciones y testimonios de la CIDH, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y otras organizaciones de DD.HH. que inequívocamente condene la violación sistemática de los derechos ciudadanos, la brutal represión, los asesinatos y todos los demás atropellos de perpetrados por el gobierno de facto, hechos sobre los cuales urgentemente elabore un informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia.**

**Instamos también a seguir denunciando este golpe de estado perpetrado ante todos los organismos internacionales, la prensa y las autoridades de todos los Estados del mundo.**

**¡NO AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA!**

**¡NO A LA MILITARIZACIÓN EN BOLIVIA!**

**Suiza, 19 de enero de 2020**

## The de facto government in Bolivia and its crimes against humanity

Since the elections of October 20, 2019, Bolivia has been going through the worst political crisis in its history. The Electoral Tribunal confirmed the victory of Evo Morales by 47.08% of the votes cast with a difference of more than 10% (648,180 votes) over the candidate Carlos Mesa, which was enough to win the elections in the first round.

The first allegation of fraud by the OAS triggered violence from opposition shock groups that burned down departmental electoral offices and headquarters of the Movement Towards Socialism MAS-IPSP party. Many authorities such as the mayor of Vinto in Cochabamba Patricia Arce, the former deputy minister of intercultural affairs Feliciano Vegamonte, the president of the chamber of deputies Victor Borda, the minister of mining Cesar Navarro and their families, were kidnapped and brutally attacked forcing them to resign their posts.

The mutiny of police forces throughout the country and the confinement of the Armed Forces to barracks gave rise to a campaign of terror against “*masismo*” (movement in support of the MAS), whose members were threatened, kidnapped, tortured, their homes burned down in an atmosphere of total impunity, forcing them to resign if they happened to be in a position of authority like the mayor of Vinto in Cochabamba.

With the suggestion that the President Evo Morales resigns made by the commander of the Armed Forces, on November 10, Morales was forced to resign decision he took with the hope it would put an end to opposition violence and of its shock and paramilitary groups (*motoqueros*).

Once the coup was completed with the resignation of Evo Morales, the repression of the paramilitary groups supported by the Police and the Armed Forces was unleashed, calling the demonstrators who defended the government “mobs”, “vandals”, “radicals” or “delinquents”. The social networks and the majority and almost hegemonic private media waged a propaganda campaign in support of the coup d'état.

The president of the Santa Cruz Civic Committee, Fernando Camacho, the main leader of the paramilitary gangs, threatened “*masistas*”, government authorities and businessmen in Santa Cruz who are sympathetic to the government of Evo Morales, with having a list of traitors ready to be eliminated in the style of Pablo Escobar in Colombia.

The opposition to President Evo Morales' government formed armed militias that had the open support of the Bolivian Police. Groups such as the Unión Juvenil Cruceñista, characterised by the International Federation of Human Rights as a “paramilitary fascist group”, were the main executors of the repression.

The media of campesino organizations such as the CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – United Confederation of Rural Workers of Bolivia), whose director, José Aramayo, was tied to a tree and tortured, were assaulted and destroyed, as were those of grassroots social organizations such as community radio stations (RPOs), or BTV, the state television channel. Upon being singled out as supporters of the government, journalists and public service media workers were attacked, humiliated and prevented from working.

A list of places to blockade was circulated through social networks, including the headquarters of ministries and other state institutions, residences of government officials and the diplomatic missions of Cuba and Venezuela. As a result of false accusations, violent groups began the permanent harassment of these embassies and the constant persecution of their diplomatic personnel, until they force them to leave the country. These violent actions violate international law, the Vienna Convention and other international treaties.

As verified by the human rights organizations that came to the country, on November 15, a march of peasants from the six federations of the Tropic of Cochabamba was fired at in Sacaba with nine deaths and dozens of wounded. Through videos recorded by the peasants themselves, the use of war weapons was made evident. The Armed Forces acted on that day under the protection of Decree No. 4078, which allowed them to use war weapons exempted from responsibility over its consequences.

The same thing happened in Senkata, El Alto, causing the death of at least 10 people and dozens of wounded five days later. The repressive forces made up of the Police and the Armed Forces indicated that they acted against “terrorists” who wanted to provoke an explosion at the gas plant. The social movements, members of the former government, peasants and indigenous people who were demonstrating against the coup d'état are being assassinated, with a total of 35 dead and more than 800 wounded.

On November 25, members of the paramilitary arm of the de facto government occupied the headquarters of the Santa Cruz Federation of Peasant Workers to burn their equipment and documentation. These operations continue to this day. On Friday, January 17, it was reported that the antennas of the ENTEL Company that provided access to cellular and radio communication services were eliminated in several rural provinces.

On December 6, the de facto government approved Decree No. 4100, whose purpose was to compensate the families of the 35 dead and hundreds of wounded from the police and military repression, on condition that they abandoned taking the case to the United Nations or other human rights organizations.

In this regard, the IACHR (Inter-American Commission on Human Rights) expressed concern about the decree, because it included a clause that would make it impossible for victims to appeal to international bodies to denounce the crimes of which they were victims in violation of international treaties such as the Treaty of Rome, which provides for the principle of imprescriptibility with respect of crimes against humanity. The IACHR Observation Mission, which gathered numerous testimonies of the Sacaba and Senkata massacres, denounced that in Bolivia there is “**no guarantee of independence of the judiciary**”.

Persecution, arbitrary arrests, and death threats against former authorities of the Evo Morales government, as well as against leaders of social organizations and MAS have been daily occurrences. The judicialization of social protest and freedom of expression (burning house, lynchings, racist attacks, etc.) is evident.

The Bolivian Ombudsman's Office has also suffered harassment, mainly in the city of Cochabamba, both in the offices of this entity as well as in the private homes of its representatives and their families.

On the other hand, the permanent harassment of the embassy and residence of Mexico violates all international conventions and agreements that protect diplomatic representations

from all countries. The non-issuance of safe-conduct for people who have applied for political asylum, which besides, has been granted by that country, is a flagrant violation of people's human and political rights.

It is worth noting the persecution of senior officials of the Morales government who are sheltered in the Mexican embassy in La Paz and who are denied the issuance of safe conduct to leave the country, such as the Minister of the Presidency, Juan Ramón Quintana; former minister Hugo Moldiz; Culture Minister Wilma Alanoca; Oruro Governor Víctor Hugo Vazquez; e-government director Nicolás Laguna; Defense Minister Javier Zavaleta; Justice Minister Hector Arce, Mining Minister, Cesar Navarro and others.

It is clear that the accusations against the former authorities are part of a strategy of political-judicial persecution, known as "Lawfare", which aims to eliminate the political participation of the MAS-IPSP in the upcoming elections scheduled for May 3.

The de facto government minister, Arturo Murillo, stated that he would go on a "hunt" against members of the ousted government and the MAS. He made public his intention to take Evo Morales to the International Criminal Court in The Hague "for crimes against humanity", blaming him for the 35 deaths, even after his resignation and exile from the country. The massacres of Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo, etc., were documented by different international human rights organizations and by friendly countries. The first-hand information gathered by these organizations gives testimony to the brutality of the coup d'état in Bolivia.

The use of adjectives that are offensive and denigrating because of their discriminatory content is frequent on the part of the de facto government, such as referring to "savages," "narcoterrorists," "vandals," "criminals," etc., to members of Evo Morales' government and the social organizations that support it, as well as international human rights observation missions, the Ombudsman's Office, and even journalists, calling them "digital warriors" or "computerised terrorists".

Murillo, celebrates and boasts about the fear sown in people for "pacification" through police/military brutality against the subversion of the "indigenous and masista hordes". They "kill each other", *'We will not tolerate terrorists or secessionists, we are watching them,'* he says.

The de facto government imposed by the violence of the paramilitary and police groups, as well as by the Armed Forces, eliminated fundamental rights to protest and to vote, not recognised by the elites that now govern the country as they had done during the 180 years of the hitherto colonial and exclusionary Republic.

The de facto government has militarized the country and repressed any kind of protest by making shows of force with military and war weapons in the streets of the main cities of Bolivia.

The argument and the reference to a terrorist threat, the denunciation of the existence of subversive nuclei or armed mass-oriented seditious groups justify the need to create Special Police Units for the fight against terrorism supported by the Israeli government as the de facto minister Murillo himself claims. This is the justification for more violence and repressive state brutality.

The existence of seditious and terrorist activities is confirmed so as to justify the repression, the impunity is granted to the military forces to massacre indigenous people, the country is militarized and shows of force with the use of weapons of war are carried out.

The systematic violation of human rights, public freedoms and individual rights and guarantees is an obvious result of the existence of a dictatorial regime imposed through a civic, police and military coup.

Eliminating all sources of independent information is part of the strategy of implementing a total media censorship.

Human rights bodies around the world must press for an end to the political persecution and repression led by paramilitary gangs protected by the police and the military.

**For the above reasons:**

**We condemn the coup d'état executed and financed by anti-democratic Bolivian right-wing forces and other foreign forces that seek to regain control of the country's important natural resources such as Lithium and Gas.**

**We strongly condemn the messages of hate and racism, as well as the extreme violence perpetrated by the supporters of the anti-democratic radical right against the indigenous, peasant peoples.**

**We strongly condemn the "Lawfare" of the de facto government that has deployed a perverse machinery of political persecution through continuous media lynching, fabrication of legal cases and permanent violation of every convention, international norm, and constitutional norm of Bolivia.**

**We urge the Armed Forces and the Bolivian National Police to guard and protect, above all, the life and dignity of every person in Bolivian territory, regardless of their political affinity or nationality, as well as to respect the immunity of diplomatic representations and protect their officials, asylum seekers and facilities.**

**We urge the UN Commission for Human Rights that, on the bases of the reports, investigations and testimonies from the IAHCR, Bolivia's Ombudsman Office and other HH.RR. organisations, unequivocally condemns the systematic violation of the citizens' rights, the brutal repression, the killings and all other abuses perpetrated by the de facto government, facts on which it urgently elaborates a report on the human rights situation in Bolivia.**

**We call on all democratic forces to condemn this violent coup, as well as the daily violations that infringe all individual, social, legal, cultural and political freedoms of the immense majority.**

**We also urge you to continue to denounce this coup d'état before all international bodies, the press and the authorities of all the States of the world.**

**NO TO THE COUP D'ÉTAT IN BOLIVIA!**

**NO TO MILITARIZATION IN BOLIVIA!**

**Switzerland, 19 January 2020**

## **Le gouvernement de facto en Bolivie et ses crimes contre l'humanité**

Depuis les élections du 20 octobre 2019, la Bolivie traverse la pire crise politique de son histoire. Le Tribunal électoral a confirmé la victoire d'Evo Morales avec 47,08% des voix avec un écart de plus de 10% (648'180 voix) sur le candidat Carlos Mesa, ce qui a suffi pour remporter les élections au premier tour.

La première allégation de fraude émise par l'OEA a déclenché la violence des groupes de choc de l'opposition qui ont incendié les tribunaux électoraux départementaux et du siège du parti Mouvement Vers le Socialisme MAS-IPSP. De nombreuses autorités comme la maire de Vinto à Cochabamba Patricia Arce, l'ancien vice-ministre des affaires interculturelles Feliciano Vegamonte, le président de la chambre des députés Victor Borda, le ministre de l'industrie minière Cesar Navarro et leurs familles ont été séquestrés et brutalement attaqués, les obligeant à démissionner de leurs postes.

La mutinerie des forces de police dans tout le pays et les forces armées cantonnées dans leurs casernes ont laissé libre cours à une campagne de terreur contre le "masismo" (mouvement en faveur du MAS), dont les membres ont été menacés, kidnappés, torturés, leurs maisons incendiées dans une atmosphère de totale impunité, les obligeant à démissionner si ces derniers étaient des autorités comme la maire de Vinto à Cochabamba.

Le 10 novembre, le commandant des forces armées a suggéré au président Evo Morales de démissionner, ce qui l'a obligé à renoncer à son poste en argumentant que cette décision mettrait fin à la violence de l'opposition et de ses groupes de choc et paramilitaires (motoqueros).

Aussitôt le coup d'Etat conclu avec la démission d'Evo Morales, la répression des groupes paramilitaires soutenus par la police et les forces armées s'est déclenchée, qualifiant les manifestants qui défendaient le gouvernement de " bandes ", de " vandales ", de " radicaux " ou de " délinquants ". Les réseaux sociaux et la presse privée majoritaire et presque hégémonique ont maintenu une campagne de propagande en faveur du coup d'État.

Le président du Comité civique de Santa Cruz, Fernando Camacho, le principal chef des bandes paramilitaires, a menacé les "masistas", les autorités gouvernementales et les hommes d'affaires de Santa Cruz sympathisants du gouvernement d'Evo Morales, d'avoir une liste de traîtres prêts à être éliminés à la manière de Pablo Escobar en Colombie.

L'opposition au gouvernement du président Evo Morales, a formé des milices armées qui avaient le soutien ouvert de la police bolivienne. Des groupes tels que l'Union juvénile de Santa Cruz, qualifiée par la Fédération internationale pour les droits humains de "groupe fasciste paramilitaire", ont été les principaux exécutants de la répression.

Les médias d'organisations paysannes comme la CSUTCB ( Confédération Syndicale Unique des Travailleurs Paysans de Bolivie), dont le directeur, José Aramayo, a été attaché à un arbre et torturé, ainsi que ceux d'organisations sociales de base comme les radios communautaires (RPO), ou BTv, la chaîne de télévision publique, ont été attaqués et détruits. Les journalistes et les travailleurs des médias du service public qui étaient désignés comme des partisans du gouvernement ont été attaqués, humiliés et empêchés de travailler.

Une liste des lieux à bloquer a été diffusée sur les réseaux sociaux, parmi lesquels les sièges de ministères et d'autres institutions de l'État, les résidences de membres du gouvernement et les missions diplomatiques de Cuba et du Venezuela. Sous le couvert de fausses accusations, des groupes violents ont commencé à harceler en permanence ces ambassades et à persécuter constamment leur personnel diplomatique, jusqu'à ce qu'ils soient contraints de

quitter le pays. Ces actions violentes violent le droit international, la Convention de Vienne et d'autres traités internationaux.

Comme l'ont vérifié les organismes de défense des droits humains venus dans le pays, le 15 novembre, une marche de paysans des six fédérations du tropique de Cochabamba a été arrosée de balles à Sacaba, faisant neuf morts et des dizaines de blessés. L'utilisation d'armes de guerre a été mise en évidence par des vidéos enregistrées par les paysans eux-mêmes. Les forces armées ont agi ce jour-là sous le couvert du décret présidentiel DS n° 4'078, qui leur permettait d'utiliser des armes de guerre en toute impunité.

Cinq jours plus tard, le même scénario s'est produit à Senkata, El Alto, causant la mort d'au moins dix personnes et des dizaines de blessés. Les forces de répression composées de la police et des forces armées ont indiqué qu'elles agissaient contre des " terroristes " qui voulaient provoquer une explosion à l'usine de gaz. Les mouvements sociaux, les anciens membres du gouvernement, les paysans et les indigènes qui manifestaient contre le coup d'État sont assassinés, avec un total de 35 morts et plus de 800 blessés.

Le 25 novembre, des membres des forces paramilitaires du gouvernement de facto ont occupé le siège de la Fédération des travailleurs paysans de Santa Cruz pour brûler leur matériel et leurs documents. Ces opérations se poursuivent encore aujourd'hui. Le vendredi 17 janvier, il a été rapporté que les antennes de la société ENTEL, fournisseur d'accès aux services de communication cellulaire et radio, ont été éliminées dans plusieurs provinces rurales.

Le 6 décembre, le gouvernement de facto a approuvé le décret présidentiel DS n° 4100, qui avait pour but d'indemniser les familles des 35 morts et des centaines de blessés de la répression policière et militaire, à condition qu'elles renoncent à leur droit de porter l'affaire devant les Nations unies ou d'autres organismes de défense des droits humains.

À cet égard, la CIDH (Commission interaméricaine des droits humains) a exprimé sa préoccupation vis-à-vis du décret, compte tenu de l'inclusion d'une clause qui rendrait impossible pour les victimes de faire appel aux organismes internationaux pour dénoncer les crimes dont elles ont été victimes, ce qui constitue une violation de traités internationaux tels que le traité de Rome, qui prévoit le principe de non-application de la prescription en cas de crimes contre l'humanité. La mission d'observation de la CIDH, qui a recueilli de nombreux témoignages sur les massacres de Sacaba et Senkata, a dénoncé qu'en Bolivie il n'y a **"aucune garantie d'indépendance du pouvoir judiciaire"**.

Les persécutions, les arrestations arbitraires et les menaces de mort contre les anciennes autorités du gouvernement Evo Morales, ainsi que contre les dirigeants des organisations sociales et du MAS sont quotidiennes. La judiciarisation de la contestation sociale et de la liberté d'expression est évidente (incendies de maisons, lynchages, attaques racistes, etc.).

Les bureaux des Médiateurs de Bolivie ont également été victimes de harcèlement, principalement dans la ville de Cochabamba, tant au siège de cette institution qu'au domicile de ses représentants et de leurs familles.

D'autre part, le harcèlement permanent à l'ambassade et à la résidence du Mexique, viole toutes les conventions et accords internationaux qui protègent les représentations diplomatiques des différents pays. Le refus de délivrer un laissez-passer aux personnes ayant demandé l'asile politique, qui a par ailleurs été accordé par ledit pays, constitue une violation flagrante des droits humains et politiques des personnes.

Il faut relever la persécution de hauts fonctionnaires du gouvernement Morales qui sont réfugiés à l'ambassade du Mexique à La Paz et à qui l'on refuse un laissez-passer pour quitter le pays, comme le ministre de la présidence, Juan Ramon Quintana ; l'ancien ministre Hugo Moldiz ; la ministre de la Culture Wilma Alanoca ; le gouverneur d'Oruro Victor Hugo Vazquez ; le directeur de l'Agence digitale du gouvernement Nicolas Laguna ; le ministre de la Défense Javier Zavaleta ; le ministre de la Justice Hector Arce, le ministre des Mines Cesar Navarro et d'autres.

Il est clair que les accusations portées contre les anciennes autorités font partie d'une stratégie de persécution politico-judiciaire, connue sous le terme de "Lawfare", qui vise à annuler la participation politique du MAS-IPSP aux prochaines élections prévues pour le 3 mai.

Le ministre du gouvernement de facto, Arturo Murillo, a déclaré qu'il se lancerait dans une "chasse" contre les membres du gouvernement démis et du MAS. Il a rendu publique son intention de traduire Evo Morales devant la Cour pénale internationale de La Haye "pour crimes contre l'humanité", lui reprochant les 35 morts, même après sa démission et son exil du pays. Les massacres de Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo, etc., ont été documentés par différentes organisations internationales des droits humains et par des pays amis. Les informations de première main recueillies par ces organisations témoignent de la brutalité du coup d'État en Bolivie.

L'utilisation d'adjectifs offensants et dénigrants en raison de leur contenu discriminatoire est fréquente de la part du gouvernement de facto, notamment les termes "sauvages", "narcoterroristes", "vandales", "criminels", etc., employés à l'encontre des membres du gouvernement d'Evo Morales et des organisations sociales qui le soutiennent, ainsi que des missions internationales d'observation des droits humains, du Bureau du médiateur et même des journalistes, qu'ils qualifient de "guerriers du numérique" ou de "terroristes informatiques".

Murillo célèbre et se vante de la peur semée au sein de la population au nom de la "pacification" au moyen de la brutalité policière et militaire contre la subversion des "hordes indigènes et masistas". Ils "s'entretuent", "nous ne tolérerons pas les terroristes ou les séditieux, nous les surveillons", déclare-t-il

Le gouvernement de facto imposé par la violence des groupes paramilitaires et policiers, ainsi que par les forces armées, a éliminé les droits fondamentaux de manifester et le droit de vote qui n'a pas été reconnu par les élites qui désormais gouvernent le pays comme elles l'avaient fait pendant les 180 ans de la République coloniale et excluante. El gobierno de facto ha militarizado el país y reprimido cualquier tipo de protesta haciendo demostraciones de fuerza con militares y armas de guerra en las calles de las principales ciudades de Bolivia.

L'argument et le recours à la menace terroriste, la dénonciation de l'existence de noyaux subversifs ou de groupes masistas séditieux et armés justifient la nécessité de créer des unités spéciales de police pour la lutte contre le terrorisme conseillées par le gouvernement d'Israël, comme l'affirme le ministre de facto Murillo. C'est la justification de plus de violence et de brutalité répressive de la part de l'État.

L'existence d'activités séditieuses et terroristes est assurée pour justifier la répression, l'impunité est accordée aux forces militaires pour massacrer les populations indigènes, le pays est militarisé et des démonstrations de force avec des armes de guerre sont effectuées.

La violation systématique des droits de l'homme, des libertés publiques et des droits et garanties individuels est le résultat évident de l'existence d'un régime dictatorial imposé par un coup d'État civique, policier et militaire.

L'élimination de toutes les sources d'information indépendantes fait partie de la stratégie de mise en œuvre d'un siège médiatique.

Les organismes de défense des droits humains du monde entier doivent faire pression pour mettre fin à la persécution politique et à la répression menées par les bandes paramilitaires protégées par la police et l'armée.

**Pour les raisons précitées :**

**Nous condamnons le coup d'État exécuté et financé par les forces antidémocratiques de la droite bolivienne et d'autres forces étrangères qui visent à reprendre le contrôle des importantes ressources naturelles du pays telles que le lithium et le gaz.**

**Nous condamnons fermement les messages de haine et de racisme, ainsi que l'extrême violence perpétrée par les partisans de la droite radicale antidémocratique contre les peuples indigènes et les paysans.**

**Nous condamnons fermement le "Lawfare" déployé par le gouvernement de facto en mettant en place un mécanisme pervers de persécution politique par le biais de lynchages médiatiques continus, de fabrication de dossiers judiciaires et de violation permanente de conventions, de normes internationales et de la Constitution de la Bolivie.**

**Nous exigeons des forces armées et de la police nationale bolivienne qu'elles veillent et protègent, avant tout, la vie et la dignité de toute personne se trouvant sur le territoire bolivien, quelles que soient ses affinités politiques ou sa nationalité, ainsi que de respecter l'immunité des représentations diplomatiques et de protéger leurs fonctionnaires, les demandeurs d'asile et leurs installations.**

**Nous appelons toutes les forces démocratiques à condamner ce coup d'État violent, ainsi que les violations quotidiennes de toutes les libertés individuelles, sociales, juridiques, culturelles et politiques de la grande majorité.**

**Nous demandons à la Commission des droits humains des Nations unies, sur la base des rapports, enquêtes et témoignages de la CIDH, du Bureau du médiateur bolivien et d'autres organisations de défense des droits humains, de condamner sans équivoque la violation systématique des droits des citoyens, la répression brutale, les meurtres et tous les autres abus perpétrés par le gouvernement de facto, et d'élaborer d'urgence un rapport sur la situation des droits humains en Bolivie.**

**Nous vous demandons également de continuer à dénoncer ce coup d'État auprès de toutes les instances internationales, de la presse et des autorités de tous les États du monde.**

**NON AU COUP D'ÉTAT EN BOLIVIE !  
NON A LA MILITARISATION EN BOLIVIE !**

**Suisse, le 19 janvier 2020**

## Die De-facto-Regierung in Bolivien und ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Seit den Wahlen vom 20. Oktober 2019 erlebt Bolivien die schlimmste politische Krise seiner Geschichte. Das Wahlgericht bestätigte den Sieg von Evo Morales (bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober 2019) mit 47,08 Prozent der Stimmen, mit einem Abstand von mehr als zehn Punkten (648.180 Stimmen) gegenüber dem Kandidaten Carlos Mesa, was ausreichte, um die Wahlen in der ersten Runde zu gewinnen.

Die Behauptung eines Betrugs durch die OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) entfesselte Gewalt durch die Stoßtrupps der Opposition, die Bezirkswahlgerichte und Gebäude der Partei Bewegung zum Sozialismus (MAS-IPSP) in Brand setzten. Viele Amtspersonen wie die Bürgermeisterin von Vinto in Cochabamba, Patricia Arce, der ehemalige Vizeminister für Interkulturalitäten, Feliciano Vegamonte, der Präsident der Abgeordnetenkommer, Víctor Borda, Bergbauminister César Navarro und ihre Familien wurden entführt und brutal angegriffen, um sie zum Rücktritt von ihren Ämtern zu zwingen.

Die Rebellion der Polizeikräfte im ganzen Land und die Kasernierung der Streitkräfte bereiteten den Weg für eine Terrorkampagne gegen den »MASismus«, deren Mitglieder bedroht, verschleppt, misshandelt und deren Wohnhäuser in Brand gesetzt wurden, all das unter Bedingungen völliger Straflosigkeit.

Nach der am 10. November ausgesprochenen Rücktrittsforderung des Kommandeurs der Streitkräfte an den Präsidenten Evo Morales sah sich dieser zum Amtsverzicht gezwungen. Er argumentierte, dass diese Entscheidung die Gewalt der Opposition und ihrer paramilitärischen und Stoßtrupps stoppen könnte.

Nach dem Vollzug des Staatsstreichs durch den Rücktritt von Evo Morales wurde die Repression durch die von der Polizei und den Streitkräften unterstützten paramilitärischen Gruppen entfesselt. Die Demonstranten, die die Regierung verteidigten, wurden »Banden«, »Vandalen«, »Radikale« oder »Verbrecher« genannt. Die sozialen Netzwerke und die große und fast hegemoniale private Presse betrieben eine Propagandakampagne zugunsten des Putsches.

Der Präsident des Bürgerkomitees von Santa Cruz, Fernando Camacho, der oberste Führer der paramilitärischen Banden, drohte den »MASisten« und mit der Regierung von Evo Morales sympathisierenden Repräsentanten und Unternehmern von Santa Cruz damit, dass er eine Liste mit Verrätern vorbereitet habe, die im Stile eines Pablo Escobar in Kolumbien eliminiert werden würden.

Die Opposition gegen die Regierung des Präsidenten Evo Morales bildete bewaffnete Milizen, die auf die offene Unterstützung der bolivianischen Polizei zählen konnten. Gruppen wie die Cruceñistische Jugendunion, die von der Internationalen Menschenrechtsföderation als »faschistische paramilitärische Gruppe« definiert wird, waren die wichtigsten Träger der Repression.

Angegriffen und zerstört wurden die Medien der Bauernorganisationen wie der CSUTCB (Gewerkschaftskonföderation der bäuerlichen Arbeiter Boliviens), deren Direktor José Aramayo an einen Baum gefesselt und gefoltert wurde, ebenso wie die der sozialen Basisorganisationen wie die Gemeinderadios (RPOs) oder das staatliche Fernsehen Bolivia TV. Die Journalisten und Angestellten der öffentlichen Medien wurden als Anhänger der Regierung angegriffen, gedemütigt und an der Arbeit gehindert.

In den sozialen Netzwerken kursierte eine Liste von Orten, die zu blockieren waren, darunter die Gebäude von Ministerien und anderen staatlichen Einrichtungen, Wohnhäuser von Regierungsfunktionären und die diplomatischen Vertretungen von Kuba und Venezuela. Aufgrund falscher Beschuldigungen begannen gewalttätige Gruppen die permanente Belagerung dieser Botschaften und die pausenlose Verfolgung ihres diplomatischen Personals, bis sie deren Abzug aus

**ESPAÑOL --ENGLISH -- FRANÇAIS --DEUTSCH -- ITALIANO -- SVENSKA**

dem Land erreicht hatten. Diese gewaltsamen Aktionen verletzen das Völkerrecht, die Wiener Konvention und andere internationale Abkommen.

Wie die Menschenrechtsorganisationen, die in das Land gekommen waren, verifizieren konnten, wurde am 15. November eine Bauerndemonstration der sechs Föderationen der Tropen von Cochabamba in Sacaba beschossen, was neun Todesopfer und Dutzende Verletzte forderte. Durch Videos, die von den Bauern selbst aufgenommen wurden, konnte der Einsatz von Kriegswaffen bewiesen werden. Die Streitkräfte agierten an diesem Tag auf Grundlage des Dekrets Nr. 4078, das ihnen den Einsatz von Kriegswaffen ohne spätere Rechenschaft erlaubte.

Das selbe geschah fünf Tage später in Senkata, El Alto, und verursachte den Tod von mindestens zehn Menschen und Dutzende Verletzte. Die aus Polizei und Streitkräften gebildeten Repressionskräfte erklärten, sie gingen gegen »Terroristen« vor, die eine Explosion in der Gasfabrik hätten provozieren wollen. Die sozialen Bewegungen, frühere Regierungsmitglieder, Bauern und Indígenas, die gegen den Putsch demonstrierten, wurden ermordet. Die Gesamtzahl der Opfer stieg auf 35 Tote und mehr als 800 Verletzte.

Am 25. November besetzten Mitglieder des paramilitärischen Arms der De-facto-Regierung den Sitz der Gewerkschaftsföderation der bäuerlichen Arbeiter von Santa Cruz, um deren Einrichtung und Dokumente zu verbrennen. Diese Operationen gehen bis zum heutigen Tag weiter. Am Freitag, 17. Januar, wurde angekündigt, dass die Antennen des Unternehmens ENTEL, die den Zugang zur Handy- und Funkkommunikation gewährleisteten, in mehreren ländlichen Provinzen abgebaut werden.

Am 6. Dezember verabschiedete die De-facto-Regierung das Dekret Nr. 4100, dessen Ziel es war, die Familienangehörigen der 35 durch die Repression von Polizei und Militär Getöteten und Hunderten Verletzten zu entschädigen, wenn diese im Gegenzug darauf verzichten, den Fall vor die Vereinten Nationen oder anderen Menschenrechtsorganisationen zu bringen.

Diesbezüglich äußerte die CIDH (Interamerikanische Menschenrechtskommission) ihre Sorge über das Dekret, weil dieses eine Klausel beinhaltet, die es den Opfer unmöglich macht, internationale Instanzen anzurufen, um die Verbrechen anzuklagen, deren Opfer sie geworden sind. Das verletze internationale Abkommen wie den Römischen Vertrag, der die Unverjährbarkeit von Verbrechen gegen die Menschlichkeit festschreibt. Die Beobachtungsmission der CIDH, die zahlreiche Zeugenaussagen über die Massaker von Sacaba und Senkata sammelte, prangerte an, dass es in Bolivien »keine Garantie für die Unabhängigkeit der Justiz« gebe.

Täglich gab es Verfolgungen, willkürliche Verhaftungen, Morddrohungen gegen ehemalige Amtsträger der Regierung von Evo Morales sowie gegen Führungspersonlichkeiten sozialer Organisationen und der MAS. Die gerichtliche Verfolgung der sozialen Proteste und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit durch Brandstiftungen, Lynchmorde, rassistische Übergriffe usw. waren offensichtlich.

Die Behörde des Ombudsmanns von Bolivien (»Verteidiger des Volkes«, Einrichtung zum Schutz der Menschenrechte; Anm. d. Übers.) erlitt vor allem in der Stadt Cochabamba ebenfalls Übergriffe, sowohl in den Büros dieser Einrichtung als auch in den Privatwohnungen ihrer Vertreter und von deren Familien.

Andererseits verletzt die ständige Belagerung der Botschaft und Residenz Mexikos alle internationalen Konventionen und Abkommen zum Schutz der diplomatischen Vertretungen der verschiedenen Länder. Die Nichterteilung freien Geleits für Personen, die politisches Asyl beantragt haben und das von diesem Land zudem gewährt wurde, ist eine gravierende Verletzung der politischen und Menschenrechte dieser Personen, unter ihnen der Präsidentschaftsminister Juan Ramón Quintana, der frühere Minister Hugo Moldiz, Kulturministerin Wilma Alanoca, der Gouverneur von Oruro Víctor Hugo Vázquez, der Direktor der elektronischen Regierung Nicolás Laguna, Verteidigungsminister Javier Zavaleta, Justizminister Héctor Arce, Bergbauminister César Navarro und andere.

Es ist offensichtlich, dass die Vorwürfe gegen die ehemaligen Amtsträger Teil einer als »Lawfare« bekannten Strategie zur politisch-juristischen Verfolgung sind, durch die die politische Beteiligung der MAS-IPSP an den für den 3. Mai vorgesehenen nächsten Wahlen verhindert werden soll.

Der De-facto-Regierungsminister Arturo Murillo erklärte, dass er auf eine »Hexenjagd« gegen Mitglieder der abgesetzten MAS-Regierung ziehen werde. Er machte seine Absicht öffentlich, Evo Morales wegen »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« vor den Internationalen Strafgerichtshof nach Den Haag zu bringen und machte ihn für die 35 Todesopfer verantwortlich, obwohl er zu diesem Zeitpunkt bereits zurückgetreten und war sich ins Exil zurückgezogen hatte. Die Massaker von Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo usw. wurden von verschiedenen internationalen Menschenrechtsorganisationen und befreundeten Ländern dokumentiert. Informationen aus erster Hand, die von diesen erhoben wurden, belegen die Brutalität des Staatsstreichs in Bolivien.

Die Benutzung von aufgrund ihres diskriminierenden Inhalts beleidigenden und herabsetzenden Adjektiven ist auf Seiten der De-facto-Regierung häufig. Ihre Mitglieder sprechen von den Funktionären der Regierung Evo Morales, den sie unterstützenden sozialen Organisationen sowie den internationalen Menschenrechtsmissionen und der Behörde des Ombudsmanns als »Wilde«, »Drogenterroristen«, »Vandalen«, »Verbrecher« usw., sogar Journalisten werden als »digitale Krieger« und »Computerterroristen« bezeichnet.

Murillo feiert die unter den Menschen verbreitete Angst als »Befriedung« durch die polizeilich-militärische Brutalität gegen die Subversion der »indigenen und MASistischen Horden«. Diese »töten einander«, behauptet er, »wir werden weder Terroristen noch Verführer tolerieren, wir überwachen sie.«

Durch die Gewalt der durch paramilitärische und polizeiliche Gruppen und die Streitkräfte eingesetzten De-facto-Regierung wurden das Grundrecht auf Protest und das Wahlrecht neseitigt. Die Ergebnisse der Wahlen wurden von den Eliten nicht anerkannt, die nun das Land regieren, wie sie es in den 180 Jahren der kolonialen und ausschließenden Republik getan haben.

Die De-facto-Regierung hat das Land militarisiert und jede Form von Protest unterdrückt, in dem es Militärs und Kriegswaffen auf den Straßen der wichtigsten Städte Boliviens präsentierte.

Mit der Berufung auf eine terroristische Gefahr, subversive Kerne oder bewaffnete kriminelle Gruppen von MASisten wird die Gründung von Sondereinheiten der Polizei für die Terrorismusbekämpfung begründet, die von der Regierung Israels beraten werden, wie De-facto-Minister Murillo selbst bestätigt hat. Das ist die Rechtfertigung für noch mehr Gewalt und staatliche Brutalität und Repression.

Um die Repression zu rechtfertigen, wird versichert, dass es kriminelle und terroristische Aktivitäten gebe,. Den Militärkräften wird Immunität gewährt, wenn sie Indígenas massakrieren. Das Land wird militarisiert und mit dem Einsatz von Kriegswaffen militärische Macht demonstriert.

Die systematische Verletzung der Menschenrechte, der öffentlichen Freiheiten und der individuellen Rechte und Garantien sind das offensichtliche Ergebnis der Existenz eines diktatorischen Regimes, das durch einen zivilen, polizeilichen und militärischen Putsch eingesetzt wurde.

Das Beseitigen jeder unabhängigen Informationsquelle ist Teil der Strategie zur Durchsetzung der medialen Umzingelung.

Die Menschenrechtsorganisationen aus aller Welt müssen Druck ausüben, damit die politische Verfolgung und die von den paramilitärischen Banden unter dem Schutz von Polizei und Streitkräften angeführte Repression beendet werden.

**Aus diesem Grund:**

**Verurteilen wir den Staatsstreich, der von der antidemokratischen bolivianischen Rechten und anderen fremden Kräften durchgeführt wurde, um die Kontrolle über die wichtigen Bodenschätze des Landes wie Lithium und Gas zurückzugewinnen.**

**Verurteilen wir energisch die Botschaften des Hasses und des Rassismus sowie die extreme Gewalt, die von den Anhängern der antidemokratischen radikalen Rechten gegen die Bauern und indigenen Völker verübt wurde.**

**Verurteilen wir umfassend das »Lawfare« der De-facto-Regierung, die eine perverse Maschinerie zur politischen Verfolgung durch mediales Lynchen, das Erfinden justiziabler Fälle und die ständige Verletzung jeder internationalen und verfassungsmäßigen Konvention und Norm in Bolivien entwickelt hat.**

**Fordern wir die Streitkräfte und die Nationale Polizei Boliviens auf, vor allem das Leben und die Würde jedes Menschen zu schützen und zu bewachen, der sich auf bolivianischem Territorium aufhält, unabhängig von seiner politischen Überzeugung oder Nationalität, sowie die Immunität der diplomatischen Vertretungen zu respektieren und ihre Funktionäre, Asylsuchende und Einrichtungen zu schützen.**

**Rufen wir alle demokratischen Kräfte auf, diesen gewaltsamen Putsch sowie die täglichen Verletzungen aller individuellen, sozialen, rechtlichen, kulturellen und politischen Freiheiten der großen Mehrheiten zu verurteilen.**

**Fordern wir den UN-Menschenrechtsrat auf, entsprechend der Berichte, Untersuchungen und Aussagen der CIDH, der Behörde des Ombudsmanns von Bolivien und anderen Menschenrechtsorganisationen unmissverständlich die systematischen Verletzung der Bürgerrechte, die brutale Repression, die Morde und alle weiteren Übergriffe der De-facto-Regierung zu verurteilen und über diese Tatsachen dringend einen Bericht zur Menschenrechtsslage in Bolivien zu verfassen.**

**Rufen wir auch dazu auf, weiter vor allen internationalen Organisationen, der Presse und den Behörden aller Staaten der Welt den verübten Putsch anzuprangern.**

**NEIN ZUM STAATSTREICH IN BOLIVIEN!**

**NEIN ZUR MILITARISIERUNG IN BOLIVIEN!**

**Schweiz, 19. Januar 2020**

## **Il governo usurpatore in Bolivia e i suoi crimini contro l'umanità**

Dalle elezioni del 20 ottobre 2019, la Bolivia sta attraversando la peggiore crisi politica della sua storia. Il Tribunale elettorale ha confermato la vittoria di Evo Morales con il 47,08% dei voti espressi con una differenza di oltre il 10% (648.180 voti) sul candidato Carlos Mesa, sufficiente a vincere le elezioni al primo turno.

La prima accusa di frode da parte dell'OSA ha scatenato la violenza dei gruppi vandalici e mercenari dell'opposizione che hanno incendiato i tribunali elettorali dipartimentali e la sede del partito MAS-IPSP del Movimento Al Socialismo. Molte autorità come il sindaco di Vinto a Cochabamba, Patricia Arce, l'ex viceministro degli Affari interculturali Feliciano Vegamonte, il presidente della camera dei deputati Victor Borda, il ministro delle miniere Cesar Navarro e le loro famiglie sono stati rapiti e brutalmente attaccati costringendoli a dimettersi.

L'ammutinamento delle forze di polizia in tutto il Paese e le forze armate dell'esercito, hanno dato vita a una campagna di terrore contro il MAS, i cui membri sono stati minacciati, rapiti, torturati, le loro case bruciate in un clima di totale impunità, costringendoli a dimettersi in quanto autorità come il sindaco di Vinto a Cochabamba.

Dopo il suggerimento delle dimissioni da parte del comandante delle Forze armate, il presidente Evo Morales, ha deciso il 10 novembre di dimettersi sostenendo che questa decisione avrebbe messo fine alla violenza dell'opposizione e dei suoi gruppi vandalici e paramilitari come i "motoqueros".

Una volta completato il colpo di Stato con le dimissioni di Evo Morales, si è scatenata la repressione da parte dei gruppi paramilitari sostenuti dalla Polizia e dalle Forze Armate, accusando i manifestanti che difendevano il loro governo, di essere vandali, estremisti e criminali. I social network e la stampa privata maggioritaria e quasi egemonica, hanno mantenuto una campagna di propaganda a favore del colpo di stato.

Il presidente del Comitato civico di Santa Cruz, Fernando Camacho, il principale leader delle bande paramilitari, ha minacciato i sostenitori del MAS, le autorità governative e gli uomini d'affari di Santa Cruz, simpatizzanti del governo di Evo Morales, di metterli in una lista di traditori nello stile del narcotrafficante Pablo Escobar in Colombia.

L'opposizione al governo del presidente Evo Morales ha formato delle milizie armate che hanno avuto l'appoggio aperto della polizia boliviana. Gruppi come l'Unión Juvenil Cruceñista, definito dalla Federazione Internazionale dei Diritti Umani come un gruppo paramilitare fascista, sono stati i principali esecutori della repressione.

I media delle organizzazioni contadine come la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), il cui direttore, José Aramayo, è stato legato a un albero e torturato, sono stati aggrediti e distrutti, così come i media delle organizzazioni sociali di base, le radio comunitarie (RPO), o BTV, il canale televisivo statale. Tutto questo per essere stati identificati come sostenitori del governo di Evo Morales.

Una lista di luoghi da bloccare è stata fatta circolare attraverso i social network, tra cui le sedi dei ministeri e di altre istituzioni statali, le residenze dei funzionari governativi e le missioni diplomatiche di Cuba e del Venezuela. A seguito di false accuse, gruppi violenti hanno iniziato le vessazioni permanenti di queste ambasciate e la costante persecuzione del loro personale diplomatico, fino a quando non sono stati in grado di lasciare il Paese. Queste azioni violente violano il diritto internazionale, la Convenzione di Vienna e altri trattati internazionali.

Come verificato dalle organizzazioni per i diritti umani che sono giunte nel Paese, il 15 novembre, una marcia di contadini delle sei federazioni del Tropico di Cochabamba è stata repressa militarmente a Sacaba causando nove morti e decine di feriti. Attraverso video registrati dai contadini stessi, è stato reso evidente l'uso delle armi da guerra. Le Forze Armate hanno

agito quel giorno sotto la protezione del Decreto Supremo n. 4078, che ha permesso loro di utilizzare le armi da guerra senza ulteriori responsabilità.

La stessa cosa è successa a Senkata, El Alto, vicino a La Paz, causando la morte di almeno 10 persone e decine di feriti cinque giorni dopo. Le forze repressive composte dalla polizia e dalle forze armate hanno dichiarato di agire contro i terroristi che volevano provocare un'esplosione nella centrale del gas.

I vari movimenti sociali, gli ex membri del governo, i contadini e gli indigeni che manifestavano contro il colpo di stato, sono stati repressi in quei, con un totale di 35 morti e più di 800 feriti.

Il 25 novembre, membri del braccio paramilitare del governo usurpatore, hanno occupato la sede della Federazione dei lavoratori contadini di Santa Cruz per bruciare le loro attrezzature e la loro documentazione. Queste operazioni continuano ancora oggi. Venerdì 17 gennaio è stato segnalato che le antenne della compagnia ENTEL sono state eliminate in diverse province rurali che fornivano accesso ai servizi di comunicazione cellulare e radio.

Il 6 dicembre il governo usurpatore, ha approvato il Decreto Supremo n. 4100, il cui scopo era quello di risarcire le famiglie dei 35 morti e delle centinaia di feriti della polizia e della repressione militare, con la condizione che rinunciassero a portare il caso alle Nazioni Unite o ad altre organizzazioni per i diritti umani.

A questo proposito, la CIDH (Commissione Interamericana per i Diritti Umani) ha espresso la sua preoccupazione per il decreto, per l'inclusione di una clausola che renderebbe impossibile per le vittime fare appello agli organismi internazionali per denunciare i crimini di cui sono state vittime in violazione di trattati internazionali come il Trattato di Roma, che prevede il principio di non applicabilità degli statuti di prescrizione in caso di crimini contro l'umanità. La missione di osservazione della CIDHR, che ha raccolto numerose testimonianze dei massacri di Sacaba e Senkata, ha denunciato che in Bolivia non c'è garanzia di indipendenza della magistratura.

Persecuzioni, arresti arbitrari e minacce di morte contro le ex autorità del governo di Evo Morales, così come contro i leader delle organizzazioni sociali e del MAS, sono stati eventi quotidiani. La criminalizzazione della protesta sociale e l'operato di alcuni media è evidente.

Anche l'ufficio del difensore del popolo boliviano (ombudsman), ha subito molestie, soprattutto nella città di Cochabamba, sia negli uffici di questo ente che nelle case private dei suoi rappresentanti e delle loro famiglie.

Inoltre, le molestie permanenti all'ambasciata e alla residenza del Messico, violano tutte le convenzioni e gli accordi internazionali che proteggono le rappresentanze diplomatiche dei diversi Paesi. La mancata emissione di un salvacondotto per le persone che hanno richiesto l'asilo politico, che è stato concesso anche da quel paese, è una flagrante violazione dei diritti umani e politici delle persone.

Vale la pena sottolineare la persecuzione degli alti funzionari del governo Morales che si trovano al riparo nell'ambasciata messicana a La Paz e a cui viene negato un salvacondotto per lasciare il Paese, come il ministro della Presidenza, Juan Ramon Quintana; L'ex ministro Hugo Moldiz; il ministro della Cultura Wilma Alanoca; il governatore di Oruro Victor Hugo Vazquez; il direttore dell'e-government Nicolas Laguna; il ministro della Difesa Javier Zavaleta; il ministro della Giustizia Hector Arce, il ministro delle Miniere Cesar Navarro e altri.

E' chiaro che le accuse contro le ex autorità fanno parte di una strategia di persecuzione politico-giudiziaria, chiamata Lawfare, che mira ad annullare la partecipazione politica del MAS-IPSP alle prossime elezioni previste per il 3 maggio.

Il ministro del governo usurpatore, Arturo Murillo, ha detto che andrà a caccia di membri del governo destituito del MAS. Ha reso pubblica la sua intenzione di portare Evo Morales alla Corte

penale internazionale dell'Aia per crimini contro l'umanità, incolpandolo per i 35 morti, anche dopo le sue dimissioni e l'esilio dal Paese.

I massacri di Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo, ecc. sono stati documentati da diverse organizzazioni internazionali per i diritti umani e da paesi amici. Le informazioni di prima mano raccolte da queste organizzazioni testimoniano la brutalità del colpo di Stato in Bolivia.

L'uso di aggettivi offensivi e denigratori a causa del loro contenuto discriminatorio è frequente da parte del governo usurpatore, come riferirsi a selvaggi, narcoterroristi, vandali, criminali, ecc. contro i membri del governo di Evo Morales e le organizzazioni sociali che lo sostengono, così come le missioni internazionali di osservazione dei diritti umani, l'ufficio del difensore civico, e anche i giornalisti, chiamandoli guerrieri digitali o terroristi informatici.

Murillo, celebra e si vanta della paura seminata nel popolo per mantenere la pace attraverso la brutalità poliziesca e militare contro la sovversione delle orde indigene e del MAS. Non tollereremo terroristi o sobillatori, li stiamo osservando, dice lui.

Il governo usurpatore imposto dalle violenze dei gruppi paramilitari e di polizia, così come dalle Forze Armate, ha eliminato i diritti fondamentali di protesta e di voto come aveva fatto durante i 180 anni della Repubblica coloniale ed emarginata.

Il governo usurpatore ha militarizzato il Paese e represso ogni tipo di protesta, facendo manifestazioni di forza con armi militari e da guerra nelle strade delle principali città della Bolivia.

L'argomentazione e l'appello alla minaccia terroristica, la denuncia dell'esistenza di nuclei sovversivi o di gruppi sediziosi armati, giustificano la necessità di creare Unità Speciali di Polizia per la lotta al terrorismo consigliate dal governo israeliano, come afferma lo stesso ministro fascista Murillo. Questa è la giustificazione per più violenza e brutalità repressiva dello Stato.

Si assicura l'esistenza di attività sediziose e terroristiche per giustificare la repressione, si garantisce l'impunità alle forze militari per massacrare gli indigeni, si militarizza il Paese e si fanno dimostrazioni di forza con l'uso delle armi da guerra.

La sistematica violazione dei diritti umani, delle libertà pubbliche e dei diritti e garanzie individuali è il risultato evidente dell'esistenza di un regime dittatoriale imposto da un colpo di Stato civile, di polizia e militare.

L'eliminazione di tutte le fonti di informazione indipendenti fa parte della strategia di implementazione di una censura mediatica.

Gli organismi per i diritti umani di tutto il mondo devono esercitare pressione per porre fine alle persecuzioni politiche e alla repressione guidate da bande paramilitari protette dalla polizia e dall'esercito.

**Per i motivi di cui sopra:**

**Condanniamo il colpo di stato eseguito e finanziato dalle forze antidemocratiche della destra boliviana e da altre forze straniere che cercano di riprendere il controllo delle importanti risorse naturali del paese, come il Litio e il Gas.**

**Disapproviamo fortemente i messaggi di odio e razzismo, così come l'estrema violenza perpetrata dai sostenitori della destra radicale antidemocratica contro i popoli indigeni e contadini.**

**Condanniamo fermamente la Lawfare del governo fascista che ha messo in atto un perverso meccanismo di persecuzione politica attraverso il continuo linciaggio dei media, l'invenzione di cause legali e la violazione permanente di ogni convenzione, norma internazionale e costituzionale della Bolivia.**

**Esortiamo le Forze Armate e la Polizia Nazionale Boliviana a custodire e proteggere, soprattutto, la vita e la dignità di ogni persona in territorio boliviano, indipendentemente dalla sua affinità politica o nazionalità, nonché a rispettare l'immunità delle rappresentanze diplomatiche e a proteggere i loro funzionari, i richiedenti asilo e le loro strutture.**

**Chiediamo a tutte le forze democratiche di condannare questo violento colpo di Stato, così come le violazioni quotidiane che violano tutte le libertà individuali, sociali, giuridiche, culturali e politiche delle grandi masse.**

**Chiediamo alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, sulla base dei rapporti, delle indagini e delle testimonianze della CIDH, dell'Ufficio del Difensore civico boliviano e di altre organizzazioni per i diritti umani, di condannare in modo inequivocabile la sistematica violazione dei diritti dei cittadini, la brutale repressione, ecc. e di preparare con urgenza un rapporto sulla situazione dei diritti umani in Bolivia.**

**Vi esortiamo inoltre a continuare a denunciare questo colpo di Stato compiuto davanti a tutti gli organismi internazionali, alla stampa e alle autorità di tutti gli Stati del mondo.**

**NO AL COLPO DI STATO IN BOLIVIA!**

**NO ALLA MILITARIZZAZIONE IN BOLIVIA!**

**Svizzera, 19 gennaio 2020**

## De facto-regimen i Bolivia och dess brott mot mänskligheten

Sedan valet den 20 oktober 2019 har Bolivia upplevt den värsta politiska krisen i sin historia. Valdomstolen fastställde Evo Morales seger med 47,08% av de avgivna rösterna med en skillnad på mer än 10% (648 180 röster) över kandidaten Carlos Mesa så det var tillräckligt för att vinna i första valomgången.

Det första påståendet om bedrägeri från OAS utlöste våld från oppositionsgrupper som brände delstats valdomstolar och högkvarter för MAS-IPSP politiska parti. Många myndigheter som borgmästaren i Vinto- Cochabamba Patricia Arce, fd vice minister för Interkulturella relationer Feliciano Vegamonte, talman i deputeradekammaren, Victor Borda, ministern för gruvdrift och César Navarro och deras familjer kidnappades och brutalt misshandlades för att tvingas avgå från sina poster. Myteriet av polisstyrkor över hela landet och inkvarterade militärer (FFAA) ledde till en terrorkampanj mot "MAS-förtroendevalda och sympatisörer". Medlemmarna hotades, kidnappades, torterades, deras privata hem sattes i brand i en atmosfär av total straffrihet. Förtroendevalda tvingades avgå som borgmästare i Vinto – Cochabamba likaså med regeringens myndigheter.

Den 10 november FFAA:s befälhavares förslag Evo Morales avgång som president. Hans avgång byttes ut mot löftet att stoppa våldspiralen som oppositionen och dess stormtrupper och paramilitärer med motorcyklar hade satt igång mot civil befolkningen. Efter det fullbordade kuppen mot Evo Morales ökade förtrycket av paramilitära grupper med polisens och FFAA:s stöd. Demonstranterna som tog gatorna för att försvara regeringen avhumaniserades och kallades nu för "mobs", "vandaler", "radikaler" eller "brottslingar." Sociala medier och de flesta och nästan hegemoniska privata pressen satte igång med en Pro-kupppropagandakampanj.

Ordföranden för medborgarkommittén i Santa Cruz, Fernando Camacho, huvudledaren för de paramilitära gäng hotade "MAS-medlemmar", statliga myndigheter och affärsmän i Santa Cruz som sympatiserade med Evo Morales regering. Att i stil med Pablo Escobar i Colombia redan fanns en svart lista där de som skulle elimineras var uppräknade. Oppositionen till president Evo Morales bildade väpnade miliser som hade öppet stöd av den bolivianska polisen. Grupper som Unión Juvenil Cruceñista, som definieras av Internationella Federationen för Mänskliga Rättigheter som en "fascistisk paramilitär grupp", var de mest aktiva i förtrycket.

Massmedia av bondeorganisationer som CSUTCB (Boliviens Riksfederationen enda lantarbetare fackförbund) anfölls och förstördes, vars direktör, José Aramayo, bands till ett träd och torterades. Detsamma hände med gräsrotsnivå sociala organisationer som radio (RPOs), eller BTV, den statliga TV-kanalen. De pekades ut som regeringens anhängare och attackerades. Journalister av public service, andra mediers medarbetare, förödmjukades och förhindrades att arbeta. Via sociala medier visades en lista över platser som skulle blockeras. De utpekade platser var ministerier, statliga institutioner, statliga tjänstemäns residens och diplomatiska beskickningar från Kuba och Venezuela. Efter falska anklagelser i massmedierna inledde våldsamma grupper med ständiga trakasserier och förföljelser av dessa ambassader och deras diplomatiska personal så att de tvingades lämna landet. Dessa våldsamma handlingar kränker internationell rätt, Wienkonventionen och andra internationella fördrag.

Mänskliga Rättigheter organ som kom till landet, den 15 november kunde konstatera att en bondemarsch från 6 förbund från Tropico i Cochabamba sköts i Sacaba med 9 dödsfall och dussintals skadade. Användningen av krigsvapen var uppenbar genom videor som spelats in av bönderna själva. Den dagen agerade FFAA i skydd av dekretet DS nr 4078 som tillät dem att använda krigsvapen utan konsekvenser. Samma sak hände i Senkata, El Alto, där dödades minst 10 personer och dussintals skadades fem dagar senare. Repressiva styrkor polisen och FFAA falsk anklagelse var att de agerade mot "terrorister", som hotade orsaka en explosion av en gasanläggning. Sociala rörelser, tidigare medlemmar av regeringen, bönder och ursprungsbefolkningar som demonstrerade mot kuppen dödas, summan av offren uppgår till 35 döda och mer än 800 sårade.

Den 25 november ockuperade den paramilitära armen av de facto-regimen Santa Cruz fackföreningsförbundet för lantarbetares högkvarter. De plundrade lokalerna förstörde deras utrustning och dokumentation och anlade sen en brand. Dessa operationer fortsätter än i dag. Fredagen den 17 januari rapporterades avlägsnandet av ENTEL kommunikationsantennor i flera landsbygds provinser som tillhandahöll mobiltelefoni och radiokommunikationer.

Den 6 december godkände de facto-regimen dekretet DS nr 4100 som syftade till att kompensera anhöriga till 35 avlidna och hundratals skadade av polisen och militärt förtryck, under förutsättning att de avstod från att söka rättvisa i FN eller andra människorättsfrågors organ. I detta avseende uttryckte IACHR (Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter) sin oro över dekretet, inklusive klausulen som skulle göra det omöjligt för offren att vända sig till internationella organ för att anmäla de brott de utsatts för. Detta bryter mot internationella fördrag, såsom Romfördraget, som föreskriver principen att brott som rör mänskligheten inte ska bli preskriberade. IACHR: s observationsuppdrag, som samlade in åtskilliga vittnesmål från massakern i Sacaba och Senkata, rapporterade att det inte finns någon garanti för rättsväsendets oberoende i Bolivia.

Förföljelse, godtyckliga arresteringar, dödshot mot tidigare Evo Morales regeringstjänstemän, liksom ledare för sociala organisationer och MAS-medlemmar har varit dagligen sedan statskuppen. Den sociala protesten och yttrandefriheten är obefintlig (mordbrand, lynchning, rasistiska attacker, o.s.v.). Även Bolivias ombud för mänskliga rättigheters kontor i Bolivia har trakasserats. Den hårdaste attacken är främst i staden Cochabamba, både på den enhetens kontor och på deras representanter även deras familjer och privata hem hotas.

Kränkning och permanenta trakasserier av Mexikos ambassad och hemvist är mot alla internationella konventioner och överenskommelser som skyddar de olika ländernas diplomatiska representationer. Icke-utfärdande av tillstånd för politiska asylsökande som beviljats asyl i annat land. Detta är en flagrant kränkning av människors mänskliga och politiska rättigheter.

Det är värt att notera förföljelsen av högre tjänstemän i Evo Morales regering. Efter den våldsamma politiska förföljelsen sökte några asyl i den mexikanska ambassaden i La Paz. Regeringsminister, Juan Ramón Quintana; tidigare minister Hugo Moldiz; kultur minister Wilma Alanoca; guvernör för Oruro Víctor Hugo Vázquez; e-

förvaltningstjänster direktör Nicolás Laguna; Försvars minister Javier Zavaleta; Justitie minister Héctor Arce, gruvminister César Navarro och andra nekas lejda så att de kan lämna landet för att rädda sina liv.

Det är uppenbart att anklagelserna mot de tidigare myndigheterna är en del av en politisk-rättslig förföljelsestrategi, kallad "Lawfare", som syftar till att omintetgöra MAS-IPSP: s politiska deltagande i nästa val som planeras till den 3 maj. De facto-regimens minister, Arturo Murillo, hävdade att han var på "jakt" på medlemmar av den avsatta MAS-regering. Han gjorde offentlig sin avsikt att anklaga Evo Morales till internationella brottmålsdomstolen i Haag "för brott mot mänskligheten.". Han beskyller honom för de 35 dödsfall, även efter hans avgång och exil från landet. Massakrerna av Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo, etc., dokumenterades av olika internationella människorättsorganisationer och av andra grannländer. Den förstahandsinformation som styrktes av dem vittnar om den brutalitet som statskuppen i Bolivia genomlevde.

Användningen av förnedrande och underkännande adjektiv med diskriminerande innehåll är dominerande i den de facto-regimen. De avhumaniserar stora grupper i samhället och betecknar de som "vilda", "narco-terrorister", "vandaler", "brottslingar" o.s.v. De drabbade är Evo Morales regeringens förtroendevalda, MAS-partis medlemmar, sociala organisationer, ursprungsbefolkning, internationella mänskliga rättigheter observationsdelegationer, ombudsmannens kansli och även journalister, har pekats ut för "IT-terrorister".

Murillo, firar och skryter om hur befolkningen har "pacificerats" tack vare polis och militär brutalitet. De har lyckats "tygla de inhemska MAS-horder och ursprungsbefolkning". När döda kommer på tal hävdar han att "de dödar varandra" och säger med bestämdhet "Vi kommer inte att tolerera terrorister och uppvigling de måste veta att vi har ögonen på dem".

Den de facto-regim som påtvingas av de paramilitära, polisiära och militärernas FFAA-gruppernas våld har eliminerat de grundläggande rättigheterna till protest och rösträtt. De återinförde en exkluderande republik med elit som nekar befolkningen sina rättigheter och styr landet som de gjort tidigare under 180 års kolonial historia. De facto-regimen har militariserat landet och ingen form av protest tillåts. Det genomförs militära ockupationer med krigsvapen av gatorna i Boliviás större städer.

De påstår att det finns ett terroristhot. Det görs fördömandet av subversiva eller uppviglande massistiska väpnade grupper vilket motiverar behovet av att skapa särskilda polisenheter för kampen mot terrorismen. Regimen har fört in i landet israeliska råd som de facto-ministern Murillo själv hävdade. Med den motiveringen växer det statliga våldet och den repressiva brutaliteten. Man har påstått att det finns subversiva aktiviteter och terrorister vilket rättfärdigar och ger militärerna immunitet för att döda ursprungsbefolkningen, militarisera landet och ursäka övervåldet och användningen av krigsvapen.

Den systematiska kränkningen av de mänskliga rättigheterna. Nekandet av de allmänna friheterna och individens rättigheter och garantier ger ett tydligt tecken av existensen av en diktatorisk regim som infördes genom en civil, polisiär och

militärkupp. Total kontroll av informationen var en viktig del av strategin i att förmörka och tysta ner statskuppen och brotten.

Människorättsorganisationer runt om i världen måste verka för att den politiska förföljelsen och förtrycket som leds av paramilitära trupper som skyddas av polisen och militärer slutar.

**För ovanstående:**

**Vi fördömer kuppen som verkställdes och finansierades av styrkor organiserade av den bolivianska odemokratiska högern och andra utländska makter som försöker återta kontrollen över landets viktiga naturresurser som litium och gas.**

**Vi fördömer starkt budskapen om hat och rasism, liksom det extrema våldet som begås av den radikala antidemokratiska högern med sina storm-trupper mot ursprungsbefolkningen och lantarbetare.**

**Vi fördömer starkt "Lawfare" av de facto-regimen som har utplacerat ett perverst maskineri för politisk förföljelse genom fortsatta Media-lynchning. Juridiska förföljelser genom påhittade rättsliga fall och permanent kränkning av alla internationella konventioner och Bolivias gällande grundlag.**

**Vi uppmanar FFAA och den bolivianska rikspolisen att i första hand säkerställa och värna om alla människors liv och värdighet i Bolivia, oavsett deras politiska tillhörighet eller nationalitet. Vi ber om att respektera diplomaternas immunitet och skydd för deras tjänstemän och lokaler, samt asylsökandes liv.**

**Vi begär av FN:s mänskliga rättigheters-kommission baserat på deras egna rapporter, utredningar och vittnesmål inför IACHR men även ombudsmannens kontor i Bolivia och andra mänskliga rättigheters organisationer ett otvetydigt fördömande av den systematiska kränkningen av medborgarnas rättigheter, brutalt förtryck, mord och allt annat missbruk av de facto-statliga övergrepp. Vi ber om skyndsamt fakta och rapport om situationen för mänskliga rättigheter i Bolivia.**

**Vi uppmanar alla demokratiska krafter att uttala sig om denna våldsamma kupp och avsky mot de dagliga kränkningarna som idag drabbar majoritetsbefolkningen i de enskilda, sociala, rättsliga, kulturella och politiska friheterna.**

**Vi uppmanar också till alla internationella organ, pressen och myndigheterna i alla stater i världen att fördöma denna sorts statskupp som är skadlig för demokratin i världen.**

**STOPPA STATSKUPPEN I BOLIVIA!**

**STOPPA MILITARISERINGEN I BOLIVIA!**

Schweiz, 19 januari 2020, Sverige 22 januari 2020.

Firmantes / Signatories / Signataires / Unterzeichnende :

**Suiza :**

1. **Fabian Molina, Consejero Nacional (diputado), miembro de Comisión de Política Exterior**
2. **Denis de la Reussille, Consejero Nacional (diputado), Comisión de Política Exterior**
3. **Walter Suter, ex Embajador de Suiza ante la República Bolivariana de Venezuela**
4. **Dr. Bernard Borel, pédiatre FMH, ancien député vaudois Parti Ouvrier et Populaire**
5. **Dr. Franco Cavalli, ancien Conseiller national et Député tessinois, Parti Socialiste**
6. **Massimiliano AY, Diputado al Parlamento de la República y Cantón de Ticino y Secretario general del Partido Comunista (Suiza)**
7. **Zeno Casella, concejal municipal de Capriasca, Partido Comunista (Suiza)**
8. **Alessandro Lucchini, concejal municipal de Bellinzona, Partido Comunista (Suiza)**
9. **ALBA – Suiza**
10. **Asociación Suiza – Cuba Nacional**
11. **Consejo Pro Bolivia – CPB**
12. **Legal Advocay Consultant – ONU Geneva**
13. **BADIL Resourde Center for Palestinian & Refugee Rights – ONU Geneva**
14. **Asociación Aipazcomun**
15. **Bolivia Plurinacional.ch**
16. **Organización ON Y VA!!!**
17. **Association de solidarité Nicaragua - Salvador, Genève**
18. **Plateforme Unité Sociale (Ginebra)**
19. **Comité Mémoire et Justice**
20. **Nouvelles Générations, Chili**
21. **ACRG Association de Chiliens résidant à Genève**
22. **Comisión de apoyo a los pueblos originarios (CAPO, Ginebra)**
23. **Association Mission Solidaire – MiSol, Genève**
24. **Congreso de los Pueblos Colombia - Capitulo Suiza**
25. **Asolatino Berna**
26. **Ciudadanías libres - Suiza. (Colombia)**
27. **Bloque Solidaridad América Unida**
28. **Por Bolivia Me MuEVO**
29. **Comité Lula Livre, Ginebra**
30. **Juventud Comunista de Suiza – Juventud del Partido Suizo del Trabajo**
31. **Chajra Runaj Masis –Ticino**
32. **Partido Comunista (Suiza)**
33. **Juventud Comunista Suiza - Juventud del Partido Comunista (Suiza)**

34. **Partido Suizo del Trabajo – Partido Obrero y Popular PdAS - PST- POP**
35. **Colectivo de chilenxs en Ticino, Cochiti**
36. Patricia Salomon Aldunate, ALBA – Suiza
37. Edmundo Isla Ray-Noel
38. Cristian Saavedra Salomon
39. Amanda Fluri
40. Omaira Maritza Henchoz
41. Michel Fleury
42. Samuel Wanitsch
43. Pierre Marbacher
44. Ximena Calanchina, presidenta de ALBA-Suiza
45. Pedro Osorio
46. Ynes Gerardo por Solidaridad Latina
47. Benito Perez, Periodista en "Le Courrier" (Ginebra)
48. Eliécer Jiménez Julio, periodista
49. Alois Gutiérrez
50. Elena Masera Arigoni
51. Elisabeth Brindesi
52. Bernard Tornare, retirado/jubilado
53. Natalie Benelli , ALBA – Suiza
54. Massimiliano Ay, ALBA – Suiza
55. René Lechleiter, ALBA – Suiza
56. Pilar Koller, ALBA – Suiza
57. Franklin Frederick, ALBA – Suiza
58. Oscar Dante Conejeros, ALBA – Suiza
59. Renata Rovira, ALBA – Suiza
60. Lucy Rodriguez, ALBA – Suiza
61. Jean-Michel Bruyat, militante France Insoumise résident en Suisse
62. Christine Bron
63. Lloyd Bossi
64. Martín Schwander, periodista, Movimiento suizo por la paz
65. Jeannot Leisi, Copresidente de la Juventud Comunista de Suiza
66. Prisca Zanetti, Novaggio
67. Elizul Mota
68. Indiana Pedrazzini
69. Mambully Ceesay
70. Ivano Lurati, presidente Chajra Runaj Masis – Ticino

71. Fabiola Lurati, secretaria Chajra Runaj Masis – Ticino
72. Flavia Zanetti
73. Enzo Ritter
74. Massimo Cattaneo
75. Maya Carlina Corminboeuf, ethnologue
76. Luca Frei, miembro del Secretariado de la Juventud Comunista Suiza
77. Martina Kohler
78. Davide Rossi, Director ISPEC Locarno
79. Omeima Abdeslam, de Sahara Occidental, representante en Suiza del Frente Polisario
80. Olga Antezana, Madre de Plaza de Mayo – Ginebra, Suiza
81. Miriam Trifoglio-Camerano, Argentinos para la Victoria, Suiza (ApV-Suiza)
82. María Aurora Lastra, ApV-Suiza, Neuchâtel, Suiza
83. Olga Montoya, Ginebra, Suiza
84. Hughes Raúl, ApV-Suiza
85. Hernán Laime Marin
86. Janette Cortez, Ginebra
87. Delia Flores, Ginebra
88. Dionicia Mamani, Ginebra
89. Juana Araujo, Lausanne
90. Hortensia de Navia, ginebra
91. Camilo Gómez, Zürich
92. Raquel Gómez, Zurich
93. Marco Joffré, Morges
94. Yayo (Junior) Joffré, Morges
95. Gabriel Joffré, Suiza
96. Doris Sután, Suiza
97. Hervé Imesch, Versoix
98. Neira Batista A. Iesch, Versoix
99. Monica Tognola
100. Gabriele Bianchi
101. Valter Sanches, General Secretary, IndustriALL Global Union
102. Suzanna Miller, IndustriALL Global Union
103. Samuel Iembo, Secretario General de la Juventud Comunista Suiza, miembro del Buró Político del Partido Comunista (Suiza)
104. Beppe Savary-Borioli
105. Norberto Crivelli
106. Sonja Crivelli

- 107. Norberto Pagani
- 108. Olivia Pagani
- 109. Paola Quadri Cardani
- 110. Thomas Heusser
- 111. Alessia Bonardi
- 112. Ricardo Torres
- 113. Jorge Giuria
- 114. Gabriela Giuria Viveros
- 115. Alberto Tognola
- 116. Michela Bucciarelli
- 117. Alessandro Girola
- 118. Evelin Hinojosa Morales
- 119. Ardjan Prendi
- 120. Maria Hinojosa Morales
- 121. Alejandro Hinojosa
- 122. Mattias Codoni
- 123. Sarah Sbabo, miembro del Secretariado del Sindicato SISA, miembro del Partido Comunista

**UK – Reino Unido :**

- 124. **SUMA QAMAÑA**
- 125. **Bolivia Solidarity Campaign – BSC**
- 126. **Gran Polo Patriótico de Venezuela en el Reino Unido – GPPUK**
- 127. **Movimiento Micaela Bastidas – UK**
- 128. **Plataforma 12 de Octubre – P12O**
- 129. **Partido Comunista de Gran Bretaña (Marxista Leninista)**
- 130. Héctor Fernandez, SUMA QAMAÑA
- 131. Dr Francisco Dominguez, Middlesex University
- 132. Amancay Colque, BSC
- 133. José Sagaz, BSC
- 134. Betty Rhaza, activista & internacionalista
- 135. Ana Rojas, Partido dos Trabalhadores do Brasil, Núcleo Londres

**Bélgica :**

- 136. **ARLAC ASBL**
- 137. **Red Europea de Asociaciones Chilenas por los Derechos Cívicos y Políticos**
- 138. **Consejo Pro Bolivia – Europa con Evo**
- 139. Alex Anfruns, periodista independiente

- 140. Camila Barrientos, Consejo Pro Bolivia
- 141. Cuesta Barros Juan
- 142. Ronnie Ramirez, Cineasta

**Suecia :**

- 143. **Asociación África, Latinoamérica, Suecia y Gambia**
- 144. **Consejo Pro Bolivia – CPB**
- 145. **Cambio Foro Bolivia – CFB**
- 146. **Asociación Sueco-Cubano ASC de Gotemburgo-Suecia**
- 147. **Organizacion Aluna**
- 148. **GRUPO DE APOYO A BOLIVIA**
- 149. Musa Bangura, Presidente de la Asociación África, Latinoamérica, Suecia y Gambia
- 150. Eduardo Miranda, Secretario de la Asociación África, Latinoamérica, Suecia y Gambia
- 151. Wálter Vera Rivera, CPB
- 152. Victoria González, CPB
- 153. Judith Muñoz, CFB
- 154. Claudio Alvares, ASC
- 155. Gabriel Inostroza
- 156. Christel Sundel
- 157. Alde Fermskog
- 158. Sara Heidari
- 159. Gunilla Åkesson
- 160. Nancy Angelacio,
- 161. Rickard Andreasson,
- 162. Gunnel Thörn
- 163. Anne Weijmar
- 164. Ulf Nilsson
- 165. Anna Lisa Eneroth
- 166. Zaki Yassin
- 167. Jenny Danielsson
- 168. Maria Claesson
- 169. Annika Ströberg
- 170. Britten Karlsson
- 171. Juan Gonzalez
- 172. Sören Rahmani
- 173. Claudia Rodriguez
- 174. Juan Ormazabal

175. Johan Sepulveda
176. Lorena Ugarte
177. Monica Aviles
178. Evelin Sepulveda
179. Einar Sehlereth
180. Pål Karlsson
181. Juan Sepulveda
182. Alicia Belmar
183. Emma Asp
184. Marta de la Fuente
185. Moniqa Sundström
186. Elisabeth Risedal
187. Irma Rima
188. Maria Quijada
189. Beatriz Arias
190. Pablo Mancilla
191. Gunnar Judenlund
192. Nancy Löfling, docente
193. Nicole Fuentes
194. Eddie Salgado
195. Jorge Alvarez
196. Jaime Pedraza
197. Maria Quijada
198. Siv Karlsson
199. Guillermo Gumucio
200. Perico Michea
201. Macarena Mendoza
202. Tito Mendoza
203. Hannes Fasold
204. Kjell Dahlström
205. Monica Auks
206. Adolfo Zambrana

**Noruega :**

207. **Grupo de Apoyo a Bolivia – GAB**
208. **Latin-Amerikagruppen i Bergen (comite de solidaridad con America Latina)**
209. Julio Toro, GAB
210. Dave Watson, Latin-Amerikagruppen i Bergen (comite de solidaridad con America Latina)

**Nicaragua :**

- 211. **ÁBACOenRed, iniciativa pedagógica con proyección nustramericana**
- 212. **Colectivo Tortilla con Sal**
- 213. Stephen Sefton, trabajador comunitario
- 214. Herman Van de Velde, pedagogo
- 215. Jorge Capelán, periodista
- 216. John Perry
- 217. Daniel Kovalik, Profesor Adjunto de Derechos Humanos

**España :**

- 218. **Plataforma Global contra las Guerras Internacional con sede en España**
- 219. **Consejo Pro Bolivia – CPB**
- 220. **Proceso de Comunidades Negras – PCN**
- 221. **Asociación Astur Cubana Bartolomé de las Casas**
- 222. **Asociación Pueblo y Dignidad de Asturias**
- 223. **Asociación Cultura Boliviana de Integración en Valencia – C.B.I.V**
- 224. **Asociación Bolivia-España Internacional de Codesarrollo, Cooperación, Integración, Ecológica y Humanista – ABICEH**
- 225. **Brigada Vallesana Simón Bolívar, Catalunya**
- 226. **Alba Granada North Africa Coordinacion**
- 227. **Nación Andaluza**
- 228. **Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez – AGABO**
- 229. **Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)**
- 230. Patricia Silvia Mascuñan Tolon
- 231. Maria Antònia Arnau Puigvert
- 232. Gonzalo Pacheco
- 233. Agustín Velloso, Profesor de universidad
- 234. Claudia E Clavijo Guevara
- 235. Manuel Moreno
- 236. José Antonio Martín Pérez, Técnico Especialista de Laboratorio
- 237. Higinio Polo, escritor
- 238. Montserrat Ponsa Tarrés, escritora, Fundación Cultura de Paz

**Francia :**

- 239. **Consejo Pro Bolivia – CPB**
- 240. **MAS IPSP – París**
- 241. **Mouvement Socialiste Bolivarien**

- 242. **Colectivo ALBA-TCP Francia**
- 243. **Círculo Bolivariano de Paris**
- 244. **Association France Amérique Latine 33**
- 245. **Solidarité Bolivarienne**
- 246. Romain Migus, écrivain et journaliste
- 247. Ruth Stöhr-Mougel, peintre
- 248. José Luis Martínez, CPB
- 249. Annick Rivoal
- 250. Bruno Guigue, professeur de philosophie à l'université de La Réunion
- 251. Patricia Montes
- 252. Jhovana Cosio, Francia
- 253. Florindo Alvis, Francia
- 254. Dra. Aysar Midani, Université de Paris 6
- 255. Ana Maria Grenet
- 256. Mónica Passos
- 257. Françoise Dumahu
- 258. Jac Forton, journaliste indépendant spécialiste de l'Amérique latine
- 259. Françoise Lopez, présidente Solidarité Bolivarienne
- 260. Fatima Touatioui
- 261. Jean-Paul Batisse
- 262. Pierre Pica – CNRS

**Venezuela :**

- 263. **Asociación Civil de Víctimas del Caracazo y del Terrorismo de Estado Cuarto Republicano – ASOVIC27F**
- 264. **Movimiento de Integración y Emancipación de Derechos Humanos del Sur – MOVIEDHS**
- 265. **Frente Bicentenario de Mujeres 200**
- 266. **Izquierda Unida Venezuela**
- 267. **Fundación Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos y el Desarrollo Social – FUNDALATIN**
- 268. **Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza**
- 269. **Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos**
- 270. **Michel Mujica, Embajador de Venezuela en Francia – Paris**
- 271. Francisco González, abogado activista internacional en derechos humanos
- 272. Thierry Deronne, realizador
- 273. José Luis Hernández Briceño, abogado
- 274. María Gabriela Mendoza

- 275. Jimmy Laguna
- 276. Dra. Aurides Mora, Constitucionalista
- 277. Mariadela Villanueva, socióloga
- 278. Iván Padilla Bravo, periodista y miembro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales, en Defensa de la Humanidad
- 279. Themis Hanoi Salaya Miranda
- 280. Ramon Cañizalez, ingeniero

#### **Italia :**

- 281. **ALBAInFormazione**
- 282. **PACHAMAMA Asociación intercultural Madre Tierra**
- 283. **MAS IPSP BG**
- 284. **CUA, Coordinamento Ucraina Antifascista**
- 285. **Granma Italia-Cuba de Celle Ligure**
- 286. **Movimiento Wiphala**
- 287. **BRICSPSUV Italia**
- 288. Corina Jurado Montenegro
- 289. Julio César Soto Antezana, PACHAMAMA
- 290. Remy Guzmán, MAS IPSP BG
- 291. Ciro Brescia
- 292. Aurora Baltodano Toledo
- 293. Geraldina Colotti, periodista, escritora
- 294. Casella Roberto
- 295. Elvia Cruz, Movimiento Wiphala
- 296. Remy Guzman, Movimiento Wiphala
- 297. Julio Soto, Movimiento Wiphala
- 298. Roberto Lesignoli, Segretario, Circolo di Parma, Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
- 299. Vitalba Ferraro

#### **México :**

- 300. **Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México (CG-ABCM)**
- 301. **Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-MÉX)**
- 302. Dr. Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH Morelos, articulista de La Jornada
- 303. Citlalli Valencia Cuesta, Activista

#### **USA – Estados Unidos :**

- 304. **Argentinos para la Victoria, Provincia 25 USA**
- 305. **Colectivo Guatemalteco en Los Angeles, California**

- 306. Alejandro De La Hoz
- 307. Alina Duarte, periodista mexicana
- 308. Mario Avila Colectivo Guatemalteco Los Ángeles, California

**Alemania :**

- 309. **Consejo Pro Bolivia – CPB**
- 310. **Movimiento Wiphala**
- 311. **Partido Die Linke**
- 312. **Blanca Merz, Diputada de Hamburgo**
- 313. Roxana Soria, CPB
- 314. Tunia Erler
- 315. Jose Luis Mamani, Movimiento Wiphala
- 316. Mayu Supa, Movimiento Wiphala
- 317. Nora Baleriano, Movimiento Wiphala

**Holanda :**

- 318. **Consejo Pro Bolivia – CPB**
- 319. **Citizen Diplomacy 05-A**
- 320. **Movimiento Wiphala**
- 321. Ivonne Van Pelt, CPB
- 322. Gabriela Tellería, CPB
- 323. Aida Mejia, Movimiento Wiphala
- 324. Angelo Sanchez Mejia, Movimiento Wiphala
- 325. Abraham Lopez Vega, Movimiento Wiphala
- 326. Jose Luis Sanchez Mejia, Movimiento Wiphala

**Ecuador :**

- 327. **Red de Solidaridad entre los Pueblos**

**Chile :**

- 328. **Alejandro Navarro, Senador País**
- 329. **Coordinadora Simón Bolívar**
- 330. **Sindicato Nacional interempresas de trabajadores de servicios y actividades conexas**
- 331. Juan Cuevas Cerda, Presidente del sindicato
- 332. Juan Carlos Guerrero Cortés, Secretario del sindicato

**Marruecos :**

- 333. José A. Egido, sociólogo, politólogo y antropólogo, universidades del país vasco y de provence

**Argentina :**

- 334. **Agrupación Federico García Lorca, hijos, nietos y bisnietos de exiliados y represaliados y fusilados por la dictadura franquista**
- 335. **Asociación de DDHH Coca Gallardo – Salta**
- 336. **Movimiento Chavismo Sur**
- 337. **Casa de Amistad con Cuba y la Patria Grande, filial Salta**
- 338. Atilio Borón, sociólogo, politólogo, catedrático y escritor
- 339. Gloria Beretervide, periodista
- 340. Teresa Marin Marin
- 341. Mariano D. Vázquez, periodista-documentalista
- 342. María del Carmen Serapio, Lic. en Cs. de la Comunicación.
- 343. Virginia King, Defensora de Derechos Humanos
- 344. Alicia Reyley, Secretaría del Centro de Jubilados de Asociación Trabajadores del Estado de Mar del Plata
- 345. Paulina Riera, presidenta ADECI asociación defensa del ciudadano, Santa Fe
- 346. Patricia Susana Delfino

**Canada :**

- 347. **Guatemala Community Network, Toronto**
- 348. **Todos por Guatemala/All for Guatemala**
- 349. **Representacion Rigoberta Menchu en Canada**
- 350. **Tzijolaj, Ottawa**
- 351. **Waterloo Region Mayan Project**
- 352. Prof. Marcelo Saavedra-Vargas, Ph. D., Université d'Ottawa/University of Ottawa
- 353. Julio Ceren, Guatemala Community Network, Toronto

**Australia :**

- 354. Dr. Robert Austin Henry, University of Sidney
- 355. Prof. Viviana Ramírez

**Guatemala :**

- 356. **Colectivo Clavel Rojo**
- 357. **Asociación Comunicarte**
- 358. **Partido Guatemalteco del Trabajo – PGT**
- 359. Marylena Bustamante
- 360. Leonel Barrios
- 361. Lydia Castañeda

- 362. Maritza Urrutia
- 363. Reginaldo Valenzuela

**Internacional :**

- 364. **Plataforma Juvenil para el Poder Popular**
- 365. **Paul-Emile Dupret, jurista, Parlamento europeo, asesor grupo GUE/NGL**
- 366. Paulo Correia
- 367. Francisco Chávez
- 368. Ricardo iacub
- 369. Felix Durán
- 370. Lic. Alexis Fagundez
- 371. Elena Muchas Montenegro

**Bolivia :**

- 372. **Amanda Dávila, Exministra de Comunicación**
- 373. **Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Paz – APDHLP**
- 374. Alejandro Dausá, teólogo
- 375. Cesar Carlos Sanjinés
- 376. Wilson Rodas
- 377. Juan Carlos Cordero, Artista
- 378. Juan Vidal Sahonero
- 379. Juan José Reynoso
- 380. Javier Mendoza
- 381. M. Mercedes Zerda C, Psicogerontóloga

**Dinamarca :**

- 382. **Partido Comunista Danés (KP)**

**Croacia :**

- 383. **Partido Socialista de Trabajadores de Croacia**
- 384. Vladimir Kapuralin, resp. RRII del Partido Socialista de los Trabajadores de Croacia

**Egypte :**

- 385. Ahmed MAGDI, periodista y Secretario de Información y Relaciones Públicas de la Unión de Jóvenes Progresistas de Egipto

**Costa Rica :**

386. **Circulo Bolivariano Yamileth López**

**Turquía :**

387. **Vanguardia Juvenil - Juventud del Partido Vatan**

388. **Union de la Juventud de Turquía (TGB)**

**Colombia :**

389. Oscar Hernando Avellaneda Dueñas, Médico pediatra

**Serbia :**

390. **Partido de los Comunistas de Serbia (KS)**

**Bangladesh :**

391. **Unidad Juvenil de Bangladesh (YUB)**

392. Sabbaha Ali Khan Colince, presidente de la Unidad Juvenil de Bangladesh (YUB)

**Uruguay :**

393. Ana Clara Lezama